

Señor

JUEZ SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE POPAYÁN

E. S. D.

REFERENCIA: Recurso de reposición en subsidio apelación
PROCESO: Ejecutivo
DEMANDANTE: La Gente Que Me Gusta S.A.S.
DEMANDADO: Ignacio Alfonso Fernández Molina
RADICACIÓN: 2021-138

JORGE ANDRÉS VILLEGAS RUIZ, domiciliado y residente en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, con el correo de notificaciones electrónicas grupojuridico_latinoamericano@yahoo.es tal como consta en el Registro Nacional de Abogados, actuando en calidad de apoderado judicial de **LA GENTE QUE ME GUSTA S.A.S.** sociedad demandante dentro del proceso de la referencia, mediante el presente escrito me permito interponer ante su despacho **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN** en contra del Auto No. 384 del 05 de marzo de 2021 notificado mediante estado No. 25 del 08 de marzo de 2021, de conformidad con los siguientes:

AUTO RECURRIDO

Mediante proveído del 05 de marzo del año que cursa, notificado por estados del día 08 del mismo mes, el despacho resolvió abstenerse de librar mandamiento de pago en favor de la sociedad demandante por considerar que la cláusula penal resulta una estimación anticipada de los perjuicios que el incumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato puedan generar, y que en razón a su naturaleza indemnizatoria esta carece de claridad y exigibilidad, haciendo que no pueda ser cobrada por la vía ejecutiva.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El despacho omite considerar que para que un documento preste mérito ejecutivo, este debe reunir los requisitos de que trata el artículo 422 del Código General del Proceso, los cuales se basan en tres pilares: el primero de ellos, que versa sobre dónde reposa el título, es decir, que conste en un documento, y para el caso concreto, el contrato de promesa de compraventa de acciones celebrado por las partes es claramente considerado como un documento en los términos del artículo 243 del Código General del Proceso el cual establece las distintas clases de documentos. El segundo radica en la procedencia del mismo, pudiendo ser del deudor o su causante, de providencia proferida por autoridad competente y de las demás que determine la ley, requisito que también se cumple al provenir de un acuerdo de voluntad de las partes.

El tercero de ellos, que radica en que la obligación cumpla con las características de ser clara, expresa y exigible, entendiendo que una obligación es clara cuando no hay duda de que existe y sobre qué trata, una obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título, es decir, que el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado estén expresamente declarados, sin que sea necesario realizar suposiciones, y es exigible, cuando puede solicitarse su cumplimiento, lo cual está directamente relacionado con no estar sometida a plazo o condición (Corte Constitucional, Sentencias SU041 de 2018 y T-747 de 2013). Así pues, para el caso que nos ocupa, en la cláusula décima segunda del contrato suscrito las partes de común acuerdo establecieron que *“DÉCIMA SEGUNDA: MÉRITO EJECUTIVO. Las partes reconocen que el presente contrato presta mérito ejecutivo para exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones de dar y hacer que contiene, por ser estas claras, ciertas, expresas y exigibles”*.

En consecuencia, dado que los contratos son ley para las partes, de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, no es dado que el juzgador desconozca el alcance que las mismas partes decidieron darle. En consecuencia, el contrato aportado al ser producto de un acuerdo de voluntades en el cual se pactaron obligaciones bilaterales, reúne en su totalidad los requisitos de que trata el artículo 422 del Código General del Proceso, por reposar en un documento, cuyas obligaciones cumplen con las características de ser claras, expresas y exigibles y por provenir de un acuerdo de las partes. Así pues,

debe entenderse que dicho acuerdo debe ser cumplido en su totalidad, teniendo en cuenta que lo transigido hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo.

Por otro lado, el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de 1991 ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia. En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta. En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho. En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones” (Corte Constitucional, Sentencia T-283 de 2013). En virtud de este, se hace necesario que el juzgador permita y garantice el acceso a la justicia que por derecho tiene la sociedad demandante, y que a partir de la valoración probatoria que merece el caso, se decida si es viable o no acceder a sus pretensiones, pero no vedarlo de su derecho de manera anticipada.

De conformidad con los argumentos anteriormente expuestos se presenta la siguiente:

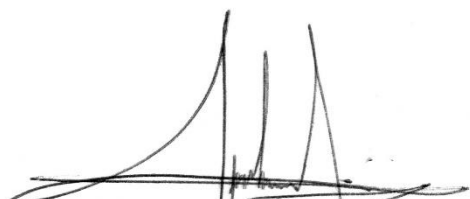
SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente se solicita al despacho que se sirva **REVOCAR** el Auto No. 384 del 05 de marzo de 2021 notificado mediante estado No. 25 del 08 de marzo de 2021 y en su lugar ordene librar mandamiento ejecutivo en favor de **LA GENTE QUE ME GUSTA S.A.S.** y en contra del señor **IGNACIO ALFONSO FERNÁNDEZ MOLINA.**

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en la secretaria del despacho o en mi oficina ubicada en la carrera 100 # 5-169 centro comercial Unicentro, torre B pasoancho piso 6. de la ciudad de Cali. Electrónicamente al correo grupojuridico_latinoamericano@yahoo.es el cual se encuentra registrado en el Registro Nacional de Abogados.

Del Señor Juez, Atentamente:



JORGE ANDRES VILLEGAS RUIZ

CC.94.520.328 de Cali

TP. 125.157 del C.S. de la J.